

Elecciones 2006: ¿vuelta al pasado?

Margarita López Maya

El Estado venezolano se caracterizó siempre por la debilidad de sus instituciones políticas. Durante el período democrático la institución electoral fue un caso emblemático. Desde 1958, pese a las regulaciones que imponían lapsos de tiempo determinados para las campañas electorales, lo que se daba era una “campaña perpetua”. El mismo día en que un Presidente tomaba posesión del cargo, comenzaba la siguiente campaña electoral. El derroche de recursos era ostensible por parte del bipartidismo AD-COPEI. Uno de los secretos mejor guardados era el origen y monto de lo invertido. *Adecos* acusaban a *copeyanos* de recibir recursos del social cristianismo alemán, *copeyanos* a *adecos* de recibirlo de la socialdemocracia internacional. El partido en el gobierno era acusado de “ventajista” al desviar recursos públicos para su campaña. Aunque existían pautas que obligaban a los partidos a rendir cuentas ante el CSE, y la prensa especulaba con cifras millonarias, la pura verdad es que nadie sabía con certeza de donde procedía tanta plata. Eso sí, en cada campaña los partidos se comprometían para la próxima vez en hacer “transparentes” sus cuentas.

Lo tremendo de la descripción anterior, es que se parece mucho a lo que estamos viviendo en la “quinta”. Ya asistimos al adelanto de la campaña presidencial, pautada para comenzar en los 6 meses anteriores a la fecha de los comicios. Mientras la oposición denuncia “ventajismo” del gobierno, los partidos de éste no parecen inmutarse ante la inocultable utilización de recursos públicos regionales y locales para trasladar a afectos a una marcha que se convocó “por la dignidad”, que terminó siendo el inicio de la “segunda batalla de Santa Inés”. El canal del Estado publicita lo que a todas luces es propaganda electoral oficialista adelantada. El gobierno acusa a la oposición de financiarse con dólares del NED, una institución vinculada al Estado norteamericano, pero parece no percatarse de que su campaña está siendo

financiada por *petrodólares*, que pertenecen a todos los venezolanos. Además, hay un agravante: el candidato del gobierno es el propio Presidente, lo que le agrega ventajismos inéditos en Venezuela.

Terry Karl, politóloga estadounidense, quien acuñó el término *petro-Estado*, y ha dedicado años al estudio de Estados con ingresos fiscales mineros, sostiene que éstos son especialmente incapaces de crear instituciones fuertes, que garanticen la igualdad de oportunidades. Los petro-Estados, como el venezolano, al no provenir sus ingresos significativamente de sectores internos, sino de una “renta” que procede del circuito comercial internacional, carecen de fuertes contrapesos que controlen y contrarresten los intereses de quienes se hacen del Estado. Se desdibujan los límites entre el partido, el gobierno y el Estado. Entre lo público y lo privado. El problema es más un asunto de instituciones débiles que de personas corruptas. ¿Serán capaces las nuevas elites políticas de crear un Poder Electoral fuerte y autónomo, que pueda garantizar nuestro derecho a una competencia electoral justa y equitativa? Este año es crucial para enrumbar tendencias en esta materia.